

A

10

AÑOS

DE LA LEY

27.149

Revista del Ministerio Público de la Defensa de la Nación

ÍNDICE

PRÓLOGO	5
PRESENTACIÓN	7
11 Razones fundantes de la primera Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y sus proyecciones <i>María Fernanda López Puleio</i>	
EXPERIENCIAS NACIONALES	39
43 La construcción de un Ministerio Público de la Defensa federal constitucionalizado, autónomo y robusto <i>Santiago Roca</i>	
55 Igualdad, transparencia y democracia. Los mecanismos, procesos y bases para el ingreso al Ministerio Público de la Defensa <i>Carlos Alberto Bado</i>	
67 La Escuela de la Defensa Pública. Un espacio para la construcción de la identidad institucional <i>Julietta Di Corleto</i>	
81 Los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación como puente para el acceso a la justicia <i>Gustavo Martín Iglesias</i> <i>María Cecilia Ponce</i>	
91 Las unidades letradas de defensa de personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental <i>Joaquín Freije</i> <i>Mariano Laufer Cabrera</i> <i>Rosalía Muñoz Genestoux</i>	
107 Tensiones, tiempo y territorio en el acceso a la justicia: el rol del operador territorial <i>Mariano H. Gutiérrez</i>	
125 A diez años de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa N° 27.149: La vulnerabilidad como criterio de acceso a la justicia y la integralidad como garantía de eficacia <i>Javier Lancestremere</i> <i>Rodolfo Martínez</i>	
137 Implementación del CPPF y respuesta de la defensa pública. Algunos desafíos y experiencias de la jurisdicción federal de Mendoza <i>Alejo Amuchástegui</i>	

- 149 **Desafíos actuales en los litigios por DESCA en las Defensorías Federales del interior del país**
María Mercedes Crespi
- 157 **Las Defensorías Públicas de Víctima: su rol en el fortalecimiento del acceso a la justicia de las víctimas en situación de vulnerabilidad**
Inés Jaureguiberry
- 175 **La importancia de los peritos en el sistema adversarial: desafíos y perspectivas para la Ciudad de Buenos Aires a diez años de la Ley 27.149**
Vanesa Maero Suparo
- 189 **El fortalecimiento institucional de la Defensa Pública y el sistema democrático. Los nuevos desafíos ante los cambios de paradigmas**
Ariel Alice

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 195

- 199 **Litigio estratégico ante los sistemas internacionales de protección: el rol del Ministerio Público de la Defensa**
Mariano Fernández Valle
Natalia M. Luterstein
- 213 **La Defensoría General de la Nación en el contexto internacional**
Sebastián Van Den Dooren
- 225 **La Defensoría Pública Interamericana. Garantía al acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos**
Rosario Muñoz
Sebastián Van Den Dooren

ENTREVISTA 235

- 239 **“Hay que seguir abriendo espacios e instalar muy fuerte qué es la defensa pública y el rol de los defensores”**
Entrevista a Stella Maris Martínez por Silvia Martínez

PRÓLOGO

En la República Argentina, el Ministerio Público de la Defensa nació con un mandato constitucional claro: garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso a la justicia. Es la institución llamada a asegurar que el derecho de defensa –y, consecuentemente, el debido proceso– sea un derecho efectivo para todas las personas; especialmente, para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Con el tiempo, esa función trascendió el plano estrictamente procesal y se consolidó como una herramienta de ampliación de derechos sustantivos y de fortalecimiento democrático.

La reforma constitucional de 1994 representó un punto de inflexión. Con la incorporación del artículo 120, el Ministerio Público fue reconocido como órgano extrapoder y se le otorgó independencia funcional y autarquía financiera, asegurando así su autonomía frente a los demás poderes del Estado. Dentro de ese diseño, el constituyente dispuso que el Ministerio Público de la Defensa se organizara con un mandato propio, diferenciado del Ministerio Público Fiscal, orientado a garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia. La decisión implicó reconocer que sin una defensa pública independiente no había posibilidad de equilibrar el sistema de justicia, de resguardar los derechos de las personas frente al poder punitivo ni de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley.

La sanción de la ley 27.149, en 2015, configuró un paso más y consolidó, en un marco legal específico, la autonomía de la Defensa Pública. Hasta entonces, la organización del Ministerio Público se regía por la ley 24.946, de 1998, que regulaba de manera conjunta al Ministerio Público Fiscal y al de la Defensa. El esquema normativo vigente refuerza la independencia de la defensa pública y reconoce una estructura organizacional que, a través de programas y comisiones, ha expandido la presencia del organismo en todo el territorio y ha permitido construir vínculos con otros actores internacionales, configurándose como un protagonista indispensable en la construcción de una justicia más democrática y cercana a las personas.

Como recuerda Fernanda López Puleio, la autonomía no es un rasgo meramente formal: es la condición indispensable para que la defensa pública pueda garantizar la igualdad de armas en el proceso penal y desplegar estrategias jurídicas eficaces frente a la acusación. Sin esa autonomía, la defensa carecería de herramientas para producir prueba propia, sostener controversias científicas de calidad o litigar en paridad con el Ministerio Público Fiscal. Su planteo ilumina el núcleo del aniversario que celebramos: la ley 27.149 aseguró, no solo una estructura orgánica, sino el espacio institucional que hace posible el ejercicio real del derecho de defensa.

Desde un plano constitucional, varios autores destacan los cimientos de este proceso. Santiago Roca se detiene en el modo en que se ha estructurado el Ministerio Público de la Defensa, con una mirada constitucional y federal. Ariel Alice, a su vez, reflexiona sobre la necesidad de repensar la igualdad y la no discriminación, a la luz de los cambios de paradigmas jurídicos y sociales, subrayando el papel de la Defensa Pública como pieza clave para garantizar derechos y fortalecer el sistema democrático. En la misma clave, Javier Lancestremere y Rodolfo Martínez estudian la transición del criterio de “pobreza” al de “vulnerabilidad” como llave de acceso a la defensa, ampliando el alcance de la protección institucional. Por su parte, Carlos Bado examina el sistema de concursos como un mecanismo destinado a asegurar igualdad, trans-

parencia y democracia en la designación de defensores. En este entramado, tal como explica Julieta Di Corleto, la formación, perfeccionamiento y actualización de los integrantes de la defensa pública han sido fundamentales para construir la identidad de la institución en torno al compromiso con la defensa de los derechos humanos.

En el terreno de la gestión institucional y la práctica cotidiana, diversos artículos muestran, asimismo, la expansión de las funciones de la defensa pública. Gustavo Iglesias y María Cecilia Ponce presentan el rol de los Programas y Comisiones de la Defensoría General de la Nación como instancias de especialización e interdisciplina que amplían el acceso a la justicia de grupos vulnerables, resaltando su aporte en litigios estratégicos, en la articulación interinstitucional y en la consolidación del modelo de defensa pública como política democrática esencial. En esta misma línea, Mercedes Crespi analiza los litigios en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde la ausencia de políticas estatales ha convertido a los integrantes del MPD en figuras clave para garantizar su vigencia. A su vez, Joaquín Freije, Rosalía Muñoz Genestoux y Mariano Laufer Cabrera ponen el foco en el trabajo de las unidades letradas de defensa de personas internadas involuntariamente por motivos de salud mental.

La creación de nuevas áreas institucionales también es objeto de reflexión. Inés Jaureguiberry aborda la conformación de las Defensorías Públicas de Víctimas, surgidas de la ley 27.372, que institucionalizaron un servicio esencial para quienes fueron víctimas de un delito y no podían afrontar un patrocinio privado. Por otra parte, Alejo Amuchástegui examina la organización y la actuación de las unidades de defensa en el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal. En relación con esto, Vanesa Maero Suparo analiza el papel central de los peritos en el sistema acusatorio y subraya la necesidad de fortalecer equipos técnicos propios, en sintonía con la advertencia de López Puleio sobre la igualdad de armas. Por su parte, Mariano Gutiérrez describe el desarrollo del Área de Abordaje Territorial y Trabajo Jurídico Comunitario, que proyecta la presencia del MPD en los barrios más vulnerables.

Finalmente, otros trabajos orientan la mirada hacia la dimensión regional e internacional. Mariano Fernández Valle y Natalia Luterstein destacan la relevancia del MPD en el litigio estratégico internacional, que permitió visibilizar violaciones estructurales de derechos humanos ante organismos regionales y universales. A ello se suma la contribución de Sebastián Van Den Dooren, quien muestra cómo la defensa pública argentina se consolidó como referente regional a través de la AIDEF, la REDPO y el BLODEPM. El mismo autor, junto con Rosario Muñoz, examina el papel de la defensoría pública interamericana, que proyecta el compromiso con la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional.

A diez años de la sanción de la ley 27.149, apreciamos que la autonomía conquistada fue el punto de partida para un proceso de expansión y consolidación institucional sin precedentes. Hoy, el Ministerio Público de la Defensa es un actor imprescindible de la democracia argentina, garante del acceso a la justicia, innovador en la producción de conocimiento y protagonista en la defensa de los derechos humanos.

Stella Maris Martínez
Defensora General de la Nación

SECCIÓN II

EXPERIENCIAS NACIONALES



Los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación como puente para el acceso a la justicia

Gustavo Martín Iglesias

Defensor Público Oficial a cargo de la Coordinación General de Programas y Comisiones

María Cecilia Ponce

Secretaria de Primera Instancia y Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación

I. Introducción. Los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación: alta especialización jurídica y enfoque interdisciplinario como ejes de trabajo

Al momento de la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (LOMPD), Ley N° 27.149, la Coordinación General de Programas y Comisiones ya contaba con casi una década de experiencia en la articulación del trabajo que desarrollan los distintos programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación (DGN), como área descentralizada, dependiente desde 2009 en forma directa de la Defensora General de la Nación (Resolución DGN N° 1119/09). En ese entonces, bajo la órbita de la Coordinación, funcionaban la Comisión de Cárceles, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional Neuropsiquiátrico, la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio, la Comisión del Migrante, la Comisión sobre Temáticas de Género, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico, el Programa para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos, el Programa de Atención a las Problemá-

ticas Sociales y Relaciones con la Comunidad y el Programa Piloto para la Asistencia Jurídica a Mujeres Privadas de Libertad.

A partir de ese momento, se consolidó el trabajo desarrollado por cada área. En ocasiones, esa labor se tradujo en la transformación de proyectos piloto en programas específicos y/o en la ampliación del universo de personas alcanzadas por el servicio ofrecido por las áreas.

La ley recogió parte de la experiencia transitada por los programas y comisiones y, en tal sentido, cristalizó normativamente áreas que habían surgido hacía poco tiempo. Entre ellas, encontramos al Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores, creado en el año 2012, debido al incremento del litigio en materia de acceso a la salud ante los incumplimientos en la prestación del servicio por parte de las obras sociales, empresas de medicina prepaga e incluso de organismos dependientes del Estado Nacional. Por otra parte, la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores abrió un panorama en el que devino necesario impulsar políticas específicas.

El mismo año, y en base a las recomendaciones de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, se creó el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos (PRAC), cuyo propósito es promover la implementación, promoción, capacitación y difusión de formas alternativas de resolución de conflictos en el MPD. En una primera etapa – entre 2012 y 2014 –, se enfocó en las prácticas de suspensión del proceso a prueba y la mediación en materia penal, como un “derecho penal consensual” que busca una respuesta penal más racional, algún grado de vigencia de la autonomía de la voluntad en materia penal y el reconocimiento de la víctima en su versión no punitiva. En 2015, el progra-

ma amplió su incumbencia a distintas áreas de trabajo del MPD, en consonancia con lo dispuesto por la LOMPD que establece, entre los deberes y atribuciones específicas de los defensores públicos oficiales, intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución judicial de conflictos con carácter previo a la promoción de un proceso en los casos. En 2024, se creó -como proyecto piloto, en el ámbito del PRAC- el Equipo de trabajo Especializado en Mediación y Prácticas Restaurativas con Adolescentes y Jóvenes, cuya tarea se orienta a superar las políticas retribucionistas y/o tutelaristas en materia penal juvenil y avanzar en la aplicación del enfoque restaurativo. Su función es la de identificar casos concretos en los que, por su complejidad, es recomendable llevar adelante medidas alternativas a la justicia penal para lograr una solución integral del conflicto.

Por su parte, la LOMPD incluyó la temática sobre trata entre sus áreas, receptando también así la creación del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas (2014). La modificación de la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas reforzó la protección de las víctimas de trata de personas y de explotación, su acceso a la justicia y su asistencia jurídica integral.

En un principio, este Programa tuvo funciones de litigio, aunque a partir de los nombramientos de los/as defensores/as públicos/as de víctima, el Programa redefinió sus funciones, que actualmente consisten en: centralizar consultas y pedidos de intervención de las víctimas y de las dependencias del MPD para prestar una respuesta integral frente al delito de trata de personas; brindar orientación para su derivación a las defensorías públicas de víctima; prestar apoyo y asistencia técnica a las defensorías de todas las jurisdicciones que lo requieran y a las

restantes dependencias del MPD que intervengan en temáticas relacionadas. Se destaca que el Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas es pionero en patrocinar las primeras querellas y acciones civiles en materia de trata de personas, y ha obtenido sentencias que se han constituido en precedentes en la materia.

En 2013, se creó el Programa contra la Violencia Institucional con la finalidad de promover los derechos de las víctimas de hechos de violencia institucional y velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas en contextos de encierro. Actualmente, tiene la misión de registrar y documentar hechos de violencia institucional ocurridos tanto en el ámbito penitenciario como en otros espacios destinados a la privación de libertad; así como también hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública. Para ello, gestiona la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura y otras formas de Violencia Institucional. El objetivo general es el de coordinar y dirigir todas las acciones de la institución para instar a la prevención de la violencia institucional, su investigación exhaustiva y la sanción de los responsables.

En 2015, además de las áreas señaladas, este organismo contaba con el trabajo de la Comisión sobre el Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; la Comisión del Migrante; la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio; la Comisión de Cárceles; y la Comisión sobre Temáticas de Género. Además, se sumaban el Programa sobre Diversidad Cultural y el Equipo de Trabajo en Centros de Acceso a la Justicia. Un año más tarde, en 2016, se creó el Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es destacable la labor desarrollada durante este período por el Programa de Asistencia y

Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que tuvo a su cargo la enorme tarea de garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia de las víctimas de delitos, tal como lo recomiendan numerosos instrumentos de jerarquía constitucional (arts. 8 y 25 de la CADH y del PIDCyP), así como también las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. A partir de la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, este programa adquirió jerarquía legal, lo que potenció su proyección a lo largo de estos años. La autonomía funcional que la Ley N° 27.372 previó para esta área devino en la habilitación de la Defensoría Pública de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que asumió las funciones llevadas a cabo por aquel programa.

En 2025 se incorporó a la órbita de la Coordinación General el Área de Abordaje Territorial y Trabajo Jurídico Comunitario, que incluye al Equipo de trabajo en Centros de Acceso a la Justicia “Acceder”, al Equipo de trabajo en la causa Río Matanza Riachuelo y al Equipo de trabajo “Proyecto Francisco”. Estas áreas, que llevan muchos años de trabajo, tienen como función asesorar y acercar el sistema de justicia formal a poblaciones residentes en los barrios más vulnerables. Se proyecta reforzar la articulación de estas áreas con los programas y comisiones, en pos de robustecer el amplio abanico de herramientas con las que cuenta la Defensa Pública dirigidas a garantizar el acceso a la justicia.

La inclusión de áreas específicas en la LOMPD, así como la ampliación de sus funciones, tuvo como horizonte fortalecer diferentes temáticas de interés institucional y optimizar el servicio de la defensa pública con un enfoque de alta especialización jurídica e interdisciplinaria, receptivo a las necesidades y problemáticas de los sectores más vulnerables de la población.

En el caso de la Comisión del Migrante, la reasignación de sus funciones a la Defensoría Pública ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, dispuesta en 2025, respondió al fortalecimiento y consolidación de la función de asistencia y patrocinio de las personas migrantes. Vale aclarar que esta Defensoría posee la competencia legal para actuar ante la Dirección Nacional de Migraciones y el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal (Ley N° 24.091).

Diez años después de la sanción de la Ley N° 27.149, podemos afirmar que el valor del trabajo realizado por estas áreas resulta incalculable. En efecto, tanto de manera autónoma o en el acompañamiento y/o asesoramiento a las/as defensores/as oficiales, la labor desarrollada resulta fundamental en tanto promueve el acceso a la justicia y la defensa de derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La creación de nuevas áreas -así como su disolución en algunos casos- respondió al dinamismo que exige el trabajo con los/as más vulnerables. Los relevamientos que periódicamente se realizan desde la Defensoría General y la Coordinación General respecto del trabajo de los programas y comisiones tienen el objetivo de lograr una caracterización acertada de las necesidades específicas de la población que recibe el servicio de defensa pública para adecuar y optimizar los recursos de los que dispone la institución.

II. Las funciones de los programas y comisiones a diez años de la LOMPD

En cuanto a la labor de los programas y comisiones, corresponde decir que ciertas áreas tienen como función principal el litigio, dada su competencia especializada (como la relacionada con la protección de migrantes, refugiados, apátridas, personas internadas por salud mental, víctimas de violencia de género y de delitos). Otras trabajan en forma

complementaria con las defensorías públicas, para casos de especial complejidad, de determinados colectivos especialmente vulnerables o como litigio estratégico. Estas áreas cooperan en relación a hechos de discriminación por género, de protección de derechos de personas privadas de libertad, de violencia institucional, de afectación a derechos económicos, sociales, culturales o ambientales y de protección a víctimas del delito de trata de personas, entre otros.

También existen áreas que tienen como cometido realizar tareas de monitoreo de las condiciones en que viven las personas que se encuentran en un contexto legal de privación de libertad, tanto en establecimientos carcelarios para adultos como en dispositivos penales juveniles, de alojamiento de niñas, niños y adolescentes separados de sus familias o de internación por motivos de salud mental.

La obligación de quienes están a cargo de los programas y de las comisiones de colaborar con todos/as los/as integrantes del Ministerio Público de la Defensa en la gestión de los casos individuales o colectivos tiene su fundamento en la especialización que tienen en determinada temática.

Durante los últimos diez años, se ha impulsado a las coordinaciones de los programas y comisiones a adoptar un rol activo en la difusión de estándares concernientes a la temática particular que dio motivo a la creación de cada área. Este es un aspecto muy importante que se refiere a hacer saber al público no sólo acerca de la existencia de vías de acceso al sistema de justicia sino, en especial, a hacer conocer los derechos que corresponden a las personas, en su generalidad y basados en su situación particular, muchas veces porque la sociedad ha generado, por acción u omisión, su vulnerabilidad particular. Esta difusión, relacionada con un cúmulo de derechos que incluyen, entre muchos otros, los de acceso a salud y a la protección de la vida e

integridad personal, se desarrolla a través de conferencias, de participación en eventos, de cooperación con otros actores institucionales o de la sociedad civil y de publicaciones de libros, entre otros. La función de difusión de estándares sirve para ayudar a quienes no tienen el tiempo y las posibilidades fácticas, dado el recargo de tareas que es común en las defensorías públicas, para conocer todos los estándares aplicables y lograr, con esa base, la ampliación de derechos.

Por otra parte, la Coordinación General incentiva la capacitación permanente, tanto de los/as coordinadores/as de las áreas como de quienes integran los equipos de trabajo a su cargo. La formación técnica de los operadores jurídicos de este Ministerio Público constituye un pilar esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los sectores más vulnerables. En un contexto de constantes transformaciones normativas y sociales, la formación continua permite a los/as integrantes del organismo dominar no solo aspectos técnico-procesales, sino también enfoques interdisciplinarios (perspectivas de género, diversidad y derechos humanos, entre otros) indispensables para una defensa integral. El foco está puesto aquí y es la base del trabajo de los programas y comisiones: la ponderación de la interdisciplina y la formación integral de quienes deben interactuar con los/as usuarios del servicio de defensa pública. Deben removerse todos los obstáculos derivados de la labor para que tales agentes puedan capacitarse, ya que no solo es un derecho y obligación, sino que no hacerlo también puede implicar una traba para el ascenso en sus carreras.

Por ello, la actualización resulta crítica ante desafíos emergentes -desde reformas legales hasta vulnerabilidades socioeconómicas agravadas-, donde una representación competente puede definir la materialización o el vaciamiento de derechos fundamentales. Asimismo, fortalece la eficiencia institucional

al optimizar estrategias de litigio, reducir dilaciones y asegurar el uso racional de recursos públicos. En definitiva, la inversión en capacitación trasciende lo individual: es una condición *sine qua non* para que el MPD cumpla su mandato legal, especialmente en una sociedad atravesada por asimetrías estructurales.

Finalmente, el último eje a resaltar respecto de quienes tienen a su cargo los distintos programas y comisiones se vincula con la obligación de realizar una adecuada gestión de cada área para cumplir con sus funciones propias. En ese rol de conducción, debe primar como objetivo el buen trato hacia las personas en general, así como a quienes integran el Ministerio Público de la Defensa. El recientemente ratificado (por Ley N° 27.580) Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (de jerarquía superior a las leyes, art. 75, inc. 22 de la CN), la Ley Orgánica N° 27.149 y la reforma al Régimen Jurídico para los/as Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as del Ministerio Público de la Defensa, en su art. 119, incisos 10 y 11, señalan el proceder correcto que se espera en este ámbito.

III. La interacción como base para el fortalecimiento de los programas y comisiones

Uno de los aspectos a destacar es la interacción lograda en estos años de trabajo. En el desempeño diario, la articulación entre los distintos programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación se erige como un requisito indispensable para llevar adelante la función encomendada a la institución. Esta interacción coordinada responde a la complejidad estructural que presentan las problemáticas jurídico-sociales de los grupos en situación de vulnerabilidad, las cuales rara vez pueden resolverse desde abordajes puntuales o sectorizados.

La naturaleza transversal de las vulnerabilidades que atiende la DGN exige un trabajo sinérgico entre sus distintas áreas especializadas. Áreas como la dedicada al abordaje de la violencia institucional y la Comisión de Cárceles, por ejemplo, requieren de una constante retroalimentación para evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar el uso estratégico de los limitados recursos institucionales; además, por supuesto, del manejo de los estándares específicos de cada temática.

La interacción entre áreas permite desarrollar estrategias de litigio que superen la mera asistencia jurídica individual. Un caso paradigmático lo constituye la atención de personas trans en alcaldías en la Ciudad de Buenos Aires: a partir de una serie de visitas que funcionarios/as de la Comisión sobre Temáticas de Género y del Programa contra la Violencia Institucional realizaron durante agosto y septiembre de 2016 a quienes estaban detenidas en distintos alojamientos penitenciarios -con el objeto de verificar sus condiciones de detención-, se detectaron formas vejatorias y discriminatorias en los exámenes médicos y requisas practicados en el ingreso a las Unidades 28 y 29 del SPF. Asimismo, el trato recibido desconocía lo dispuesto por la Ley de Identidad de Género. A raíz de eso, el Programa contra la Violencia Institucional, la Comisión de Cárceles y la Comisión sobre Temáticas de Género presentaron, en forma conjunta, un habeas corpus preventivo, colectivo y correctivo en el que se denunció el carácter vejatorio y discriminatorio de las requisas y visu médico a las que se sometía a las personas transgénero al ingresar en las unidades penitenciarias.

El trabajo de articulación interinstitucional -MPD junto con otros organismos públicos- dio como resultado la "Guía de Procedimiento de 'visu médico' y de 'control y registro' de personas trans en el ámbito del Servicio Central de Alcaldías" y su posterior

homologación judicial. El texto establece pautas de actuación del personal médico y penitenciario compatibles con la Ley de Identidad de Género N° 26.743. La observación particularizada para este grupo vulnerable continúa en la actualidad, por cuanto si bien se ha restringido el alojamiento en aquellos centros de encierro, hoy están en comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y en otros establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

Otro ejemplo clave del trabajo de la institución es la articulación lograda entre el programa destinado a la protección de víctimas de trata de personas con el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos. En efecto, los aportes técnicos relativos a la temática específica de trata son fundamentales a la hora de abordar los casos trabajados por el Programa que asiste a las víctimas de delitos, entre ellos, justamente, el de trata.

La sistematización de experiencias derivadas del trabajo coordinado entre áreas ha permitido a la DGN desarrollar estándares propios de actuación. Evidentemente no es posible en este breve comentario incluir todos los casos exitosos que se han promovido en estos años, entre otros, de acceso al empleo sin discriminación por género, de acceso a la justicia de víctimas de violencia en el hogar o de defensa técnica efectiva. Pero vale decir que, a través de ellos, se han reafirmado los estándares contemplados en el sistema interamericano y universal de derechos humanos.

La interacción estratégica entre programas y comisiones trasciende, así, la mera suma de esfuerzos institucionales para convertirse en un componente esencial del modelo de defensa pública. Este enfoque colaborativo no sólo mejora la calidad técnica de la representación jurídica, sino que fortalece el rol constitucional de la DGN como órgano garantista de derechos fundamentales frente a las asimetrías propias del sistema de justicia. Su

profundización se presenta como un desafío ineludible para reducir las brechas entre el reconocimiento formal de derechos y su efectiva realización material.

IV. Litigio colectivo y estratégico

La Ley N° 27.149 tiene como guía de actuación del Ministerio Público de la Defensa el principio de interés predominante del asistido o defendido, que expresa que quienes lo integran “[a]ctúan, en cumplimiento de diversos objetivos de acuerdo a su competencia funcional, promoviendo la accesibilidad al servicio y procurando dar satisfacción prioritaria a las necesidades concretas del asistido o defendido” (art. 5, b). Este precepto es una caracterización muy fuerte del rol de quien ejerce la defensa pública, porque permite entender cómo, dentro de una estructura funcional y administrativa común, compleja y reglamentada, pueden ser atendidos en los procesos intereses diferentes y hasta contradictorios. Es facultad de cada defensora y defensor público instar las pretensiones de aquellas personas concretas cuya defensa, patrocinio o representación le es asignada, sin mayores restricciones que el respeto -que a todos los habitantes compete- de la Constitución Nacional y las leyes.

El saber técnico de las y los magistrados debe ser aplicado para garantizar a las personas el acceso al sistema judicial, particularmente respecto de quienes están en situación de vulnerabilidad. Dentro de ese marco, la ley da sustento también a la posibilidad de que, en determinadas situaciones, el amparo a las garantías de los habitantes no sea promovido a través de pleitos individuales, sino colectivos.

La promoción de acciones colectivas, en general sin inconvenientes, ha enfrentado obstáculos de la judicatura, apoyados en una lectura absolutamente literal del art. 43 de la Constitución Nacional, en cuanto reconoce

legitimación activa para la protección de los derechos de incidencia colectiva en general a la persona o personas afectadas, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. No obstante, como derivación de la garantía del acceso a la justicia del art. 120 de la Constitución Nacional, debe sostenerse que en la ley 27.149, sus arts. 1° y 5 a) hablan del deber de garantizar el acceso a las personas en condición de vulnerabilidad o que enfrenten una discriminación estructural. Para esta última, la vía debe ser colectiva y no individual. En cuanto a la Defensoría General de la Nación, el art. 35 de la Ley Orgánica faculta, en su inciso b), a impulsar mecanismos de protección colectiva de derechos humanos -sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional-; el inc. e), por su parte, dispone que le corresponde diseñar y ejecutar políticas públicas para la protección de sectores en condiciones de vulnerabilidad, implementando programas y comisiones que coadyuven para una mejor gestión de casos. Esto es: no hay contradicción sino complementariedad entre las atribuciones para legitimarse en acciones colectivas de diversos actores, algunos públicos y otros ONG, con lo que en una interpretación correcta del ordenamiento jurídico en su conjunto no debería dar lugar a mayores discusiones.

Debe notarse que el mandato de coordinación que establece el art. 120 de la Constitución Nacional, por el cual el Ministerio Público debe ejercer sus facultades “en coordinación con las demás autoridades de la República”, no está dirigido solo a sus dos ramas -Ministerio Público Fiscal y de la Defensa-, sino a todas las autoridades de los tres poderes del Estado Nacional, por cuanto *coordinación* implica obligaciones recíprocas, de respeto a las funciones pro-

pías y nunca de subordinación. Esto conlleva la facultad de incidir en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a sus objetivos constitucionales y legales -que se deben ejercer en las modalidades fijadas en el art. 7° de la ley N° 27.149-, con lo que no solo se limita a las acciones judiciales. Pero, dentro de ellas, corresponde su utilización para cincelar el desarrollo progresivo de los derechos humanos en toda su amplitud, evitar estándares regresivos y procurar resolver problemas concretos hacia la población afectada.

Especialmente en lo que se refiere a la delicada materia de las acciones de habeas corpus colectivos, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Corte bonaerense que había interpretado restrictivamente el mandato impartido en la causa “Verbisky” (Fallos: 328:1146), con lo que ratificó el deber de admitir una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo del reclamo y a implementar un remedio congruente con su alcance. El fallo consideró ineficaz la decisión de la Suprema Corte de la Provincia desde una perspectiva enfocada en la entidad y magnitud de las violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad que -cuanto menos- deben comenzar a ser mitigadas, en tanto exceden la eventual promoción de reclamos individuales referidos a situaciones particulares (Fallos: 344:1102). Se dijo también que la reforma constitucional de 1994 reconoció una legitimación activa ampliada para la representación judicial de los derechos de incidencia colectiva y que, si bien la naturaleza de estos litigios puede conllevar cierta complejidad en la ejecución de sus sentencias, su adecuado cumplimiento entraña un efecto multiplicador en la tutela efectiva de derechos constitucionales (voto del juez Rosatti; Fallos: 344:1102).

V. Palabras finales

La presente revista contiene artículos en los que se avanza en la descripción de las funciones de las diversas áreas de la institución, de modo que corresponde remitirse a ellos para profundizar sobre su funcionamiento. Pero podemos, en este espacio, destacar la importancia que han llegado a adquirir en la DGN los programas y las comisiones, además de reconocer el esfuerzo de quienes los integran para capacitarse, trabajar con esmero y, fundamentalmente, atender al objetivo de respetar el interés predominante de la personas amparadas o defendidas.

Mantener y fortalecer esta política pública no implica sólo un acto de gestión institucional, sino una decisión democrática esencial. Los programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación han demostrado que la especialización, la interdisciplina y la articulación interinstitucional son herramientas poderosas para transformar realidades y garantizar derechos. Renunciar a este modelo significaría retroceder en el camino hacia una justicia más inclusiva y equitativa.

Por ello, resulta imperativo no sólo conservar lo construido en estos diez años desde la sanción de la LODMP, sino profundizarlo, ampliando capacidades, modernizando recursos y promoviendo la formación continua. La Defensa Pública, como garante del acceso a la justicia, sólo será verdaderamente eficaz si sigue situando en el centro a las personas y comunidades más vulnerables, reafirmando que el Estado tiene la obligación indelegable de protegerlas, escucharlas y acompañarlas.

En este desafío, el fortalecimiento de la actividad en el marco de la Coordinación de Programas y Comisiones no es una opción: es una necesidad impostergable para consolidar un país donde la justicia sea un derecho vivido y no un privilegio.